

Violencia política, reforma y reconstrucción en Sudafrica*

Morris, Mike; Hindson, Doug

Mike Morris, Doug Hindson: Cientistas sociales sudafricanos, catedráticos de la Universidad de Natal, Durban.

Muchas veces se ha dicho que la violencia política que recorre Sudáfrica es culpa del áparteid. Si se trata de establecer un argumento moral, entonces eso es obviamente cierto. Pero si se está buscando una explicación fundada en procesos materiales, sociales e históricos, entonces hay que considerar dos preguntas: ¿por qué esto está ocurriendo ahora que el áparteid está en desaparición, en lugar de hace 15 ó 20 años cuando estaba en pleno apogeo? Lo que es más, ¿por qué en una sociedad en la que los blancos han dominado y oprimido históricamente a los negros, y muchas veces con violencia, la gente negra se está matando entre sí en lugar de matar blancos? Plantear esas preguntas reformula toda nuestra óptica de la violencia; hay que buscar las raíces de la violencia en los efectos de la desintegración del áparteid, antes que en su práctica continua.

La explicación que vamos a ofrecer se basa no sólo en las divisiones dentro de la población negra, lo que sería sólo una parte de la respuesta, sino también en un estudio de las divisiones dentro de la sociedad. En esencia el poder del Estado y la cohesión de la sociedad blanca han escudado a esta última de los elementos más graves de la violencia y la destrucción. Gracias a la distribución socioespacial del poder en las ciudades, las clases y grupos más acaudalados están en capacidad de desplazar la lucha por el espacio residencial a las zonas más vulnerables de la ciudad, a sus periferias, donde la asignación y control de terrenos es deficiente, bien sea debido al legado del áparteid, como en los distritos negros, o porque las relaciones de propiedad son endeblas, como en el caso de las áreas tribales y campamentos ilegales cercanos a las metrópolis. Simultáneamente, el Estado ha garantizado que toda una serie de recursos siga llegando a las áreas citadinas de población blanca, y cada vez más a las áreas de mestizos y asiáticos. En consecuencia la

pugna por los recursos ha sido desviada, desplazada y confinada a las áreas de población negra, de manera que, en lugar de un conflicto por la distribución de los recursos en general, lo que está ocurriendo es un conflicto por la distribución de los recursos marginales que sobran para las áreas residenciales negras, cuyos habitantes están aumentando rápidamente sin que haya un aumento paralelo de los recursos a su disposición.

La violencia y la desintegración del áparteid

La dura realidad es que los antagonismos raciales, étnicos y de clase que estaban contenidos bajo el áparteid clásico salieron a la superficie en el clima de liberalización económica y fin del segregacionismo. Muchos opinaron que el abandono de esas leyes tan discriminatorias daría lugar a comunidades africanas urbanas más estables y, en general, a un reordenamiento pacífico de la sociedad urbana por vías conducentes a un ulterior crecimiento económico. Asimismo los neoliberales argumentaron que la desregulación y eliminación de las barreras raciales en las oportunidades empresarias, dentro de las ciudades, conducirían a la despolitización de asuntos fundamentales para gran parte de la sociedad urbana y derivarían en un rápido crecimiento económico. Otros han destacado que el retiro del Estado como garante de las comodidades urbanas y la creación de estructuras gubernamentales negras a nivel local darán a los residentes negros la oportunidad de crear sus propias comunidades residenciales que serán sustancialmente más armoniosas e integradas socialmente.

Sin embargo, resulta claro que los comienzos de una sociedad urbana post-áparteid no están ni van a estar caracterizados por hechos tan optimistas. Contrariamente a lo que esperaba mucha gente, y a las predicciones de un grupo de científicos sociales liberales, el debilitamiento gradual de las instituciones del áparteid y el abandono de sus políticas han llevado a una escalada de las tensiones sociales y a una violencia creciente, no decreciente, en todo el país. Conjuntamente con el colapso del segregacionismo y los cambios en el papel del Estado, sobrevino un caos social cada vez mayor. Un crecimiento económico decreciente en las metrópolis, una veloz urbanización y el desarrollo de barriadas marginales han formado parte del mismo proceso que ha causado dislocaciones sociales masivas, revueltas, violencia y una intensificación general del conflicto político dentro de las áreas urbanas metropolitanas. Junto con el conflicto repetidamente violento entre organizaciones políticas e ideologías rivales dentro de la población negra urbana, aparecieron también antagonismos entre comunidades de áreas residenciales, choques entre habitantes de barriadas pobres y vecinos de distritos medios y discordia entre la

clase obrera sindicalizada, la clase media negra emergente y las clases negras de menores recursos en constante crecimiento.

La antigua forma de regulación del *áparteid* clásico verwordiano se basaba en un antagonismo de clase y raza flagrante y crudo, mantenido bajo control por una fuerza estatal apabullante y un control burocrático de todos los aspectos de la vida social, económica y política. La crisis que surgió a finales de los 70 hizo añicos la eficacia de la antigua estructura y llevó el proceso de reestructuración por nuevos cauces. El deterioro económico y la descomposición política desataron tensiones en formas que ya no era posible controlar socialmente. Al desintegrarse el *áparteid* aumentaron los antagonismos sociales y disminuyó la capacidad del Estado para controlarlos. Paralelamente al antiguo sistema declinante surgieron nuevas divisiones sociales, relaciones de clase e incipientes formas de regulación política. Por consiguiente hicieron erupción pugnas más graves debidas al colapso de las antiguas instituciones y estructuras del *áparteid* clásico, así como también por los intentos de instituir nuevas formas de regulación.

Sin embargo, la violencia endémica no fue una consecuencia inevitable del colapso del segregacionismo. Es posible que hubiera vías diferentes para alejarse del *áparteid* - con todo y lo difícil que esto pudiera ser - que no entrañaran necesariamente los mismos resultados conflictivos. Pero la vía particular que eligió el Estado para tratar de reformar el *áparteid* en los años 80 agudizó y encendió el antagonismo inherente a ese sistema. La «urbanización ordenada», sin programas importantes de infraestructura patrocinados por el Estado, exacerbó la base material de conflicto en la sociedad negra. Relegar el asunto de los derechos políticos para los africanos a un lugar secundario en los asuntos distritales básicamente politizó el conflicto en torno a la asignación de recursos materiales urbanos.

Las históricas iniciativas de Frederik De Klerk, el 2 de febrero de 1990, dejaron atrás los programas de reforma de P. W. Botha, en favor de un nuevo sistema de inclusión-exclusión en el que la raza ya no es la base institucional de la inclusión. Mientras tanto, fuerzas poderosas en el Estado y en la capital están tratando de adoptar una «solución del 50%»: reconstituir la sociedad según lineamientos cada vez menos racistas, pero que seguirán excluyendo a un sector muy grande de la población de los recursos más importantes y de los centros de poder de la sociedad. Una opción nueva y disgregante está surgiendo de las cenizas de la desintegración del *áparteid*, creando novedosos y muy profundos antagonismos de clase y raza. Constantemente están brotando conflictos graves y antagonismos extremos por la asignación de los recursos sociales, ya que los aparatos estatales, formas de

controlar los conflictos, normas burocráticas y métodos de organización del antiguo sistema coexisten con nuevas fuerzas sociales, formas de organización y estrategias de diferenciación.

Además, sobre todo en KwaZulu, pero también en el resto del país, la posibilidad real de la desaparición del sistema regional amenaza directamente a la élite nativa de jefes y miembros de la Asamblea Legislativa. Muchos jefes, los miembros del comité central del Inkatha o los miembros de la Asamblea Legislativa de KwaZulu se benefician sustancialmente, sea directamente o a través del padrinzgo, de las instituciones y del gobierno de KwaZulu. En las áreas rurales ejercen una influencia enorme sobre sus subordinados directos - Indunas y cabecillas - quienes a su vez pueden ejercer coacción en las áreas de su jurisdicción.

El conflicto más grande se relaciona esencialmente con cuáles grupos raciales, clases y estratos sociales tendrán sus intereses mejor protegidos en una futura distribución política y económica. En ese contexto, la lucha entre blancos y negros por el acceso a recursos materiales en las áreas urbanas quedó desplazado a las áreas residenciales negras, debido a la cohesión de la sociedad blanca, al mantenimiento del control administrativo y la prestación de servicios en manos de estructuras gubernamentales locales esencialmente blancas, y al poder del Estado para contener la violencia.

La desintegración del áparteid ha originado una variedad de procesos económicos, sociales y políticos concomitantes que determinan los contornos de la violencia: urbanización acelerada, mayor diferenciación de las clases, pugnas por los escasos recursos residenciales entre comunidades urbanizadoras geográfica y socialmente diferentes y luchas políticas graves entre los centros de poder beligerantes. Las raíces de la violencia se deben buscar, no en la implementación de formas segregacionistas de control social, sino en el colapso de esas formas; no en el mantenimiento del áparteid sino en el intento de institucionalizar una nueva base social sobre los cimientos de una sociedad racialmente dividida.

Urbanización acelerada y nuevas divisiones sociales

El áparteid clásico verwoerdiano se preocupaba esencialmente por contener el proceso de urbanización entre la población africana. La «reforma», tal como fue iniciada por P. W. Botha en los años 80, aceptaba la inevitabilidad de la urbanización, pero intentaba canalizar el proceso en una forma «ordenada». De allí la proliferación de barriadas pobres y comunidades ilegales alrededor de las áreas metropoli-

tanos a finales de los 80. En lugar de comprimir las clases, como en el *áparteid* clásico, la reforma facilitaba su diferenciación. De allí la transformación de la esfera de reproducción social de los africanos de los viejos distritos, lo que obstruyó la movilidad de clase y encerró todas las clases en un espacio geográfico-social, favoreciendo el surgimiento de áreas residenciales demarcadas socialmente con acceso diferenciado a los recursos urbanos.

A pesar del abandono del segregacionismo formal, todavía existe un foco poderoso de desigualdad económica, arraigado en el pasado, que está estimulando una mayor diferenciación social. Dentro de la población negra comenzaron a surgir nuevas divisiones basadas en disparidades en las oportunidades de empleo, el ingreso y el acceso a los recursos residenciales urbanos. Las antiguas divisiones raciales del período del *áparteid* quedaron encubiertas por una creciente diferenciación de clases dentro de las áreas urbanas negras. Ahora los blancos, mestizos y asiáticos, junto con una pequeña minoría de población africana, conforman la clase media y alta, mientras la mayoría africana está distribuida abrumadoramente en posiciones de clase obrera y marginal.

La urbanización acelerada ha conducido a una reasignación en las ciudades y a una acrecentada presión sobre los recursos sociales urbanos. De esta manera desató una lucha por espacio, tierras y recursos residenciales, que lleva a las comunidades a movilizarse según nuevos lineamientos basados en las divisiones sociales emergentes: raza, clase, idioma y origen étnico. Esto a su vez proporciona la base para la movilización y las líneas de fractura internas.

Hasta hace poco, las reformas estatales habían acentuado el conflicto en lugar de amortiguarlo. La liberalización económica no ha coincidido con una incorporación política de la masa del pueblo al proceso democrático nacional. Además, desde finales de los 70, la liberalización y el abandono del racismo han tenido lugar en un contexto de decadencia económica y condujeron al resurgimiento de divisiones de clase, étnicas y de otros tipos. Esto ocurre en parte porque esos procesos han revelado oportunidades para algunos y dieron salida a aspiraciones por largo tiempo sofocadas bajo el *áparteid*, pero sin eliminar todas las grandes fuentes de resentimiento. Esos procesos han rendido beneficios políticos y económicos para los nuevos estratos medios de la población (incluyendo a una clase obrera relativamente privilegiada), mientras excluyen o marginan a los empobrecidos y a los desposeídos.

Bajo el segregacionismo clásico, los recursos del distrito eran estrictamente asignados por los administradores distritales y los funcionarios administrativos bantú, aplicando normas y regulaciones burocráticas; en la era de la reforma, la vida urbana negra se convirtió en una creciente lucha individualizada. La incertidumbre que eso produjo condujo a que los ocupantes de los barrios pobres se reconstituyeran como colectivos, y alimentaran resentimientos contra los residentes formales del distrito. La discriminación y la violencia de una maquinaria estatal prejuiciada en la asignación de recursos fue reemplazada por un proceso más anárquico y arbitrario.

En lugar de enfrentar directamente a los funcionarios públicos responsables de implementar las leyes de control, las comunidades se encuentran cada vez más prisioneras de conflictos entre ellas. Los pobrísimos residentes de los barrios marginales parecen haber caído en guerras interminables y recíprocamente destructivas. Los conflictos internos que se producen simultáneamente dentro de esas comunidades, se desvían hacia ataques a los residentes del distrito, también pobres pero relativamente en mejores condiciones, a fin de conseguir acceso a los recursos urbanos. En muchas áreas los ataques a los residentes del distrito, instigados por «vigilantes» y caudillos desde los campamentos de ocupantes ilegales, no han sido más que vulgares incursiones para apoderarse de «botines», saqueando las casas y acarreado artículos de consumo hasta los barrios marginales. En un estado de ánimo similar, los marginados moradores de los albergues para trabajadores, quienes conforman los sectores más pobres y socialmente aislados de la comunidad negra urbana, se han trabado en luchas con los residentes de los barrios marginales y del distrito. Así pues, el incremento de las desigualdades de la vida urbana puso en marcha conflictos más grandes, y a menudo violentos, cuando agrupaciones sociales diferentes se enfrentan por los derechos de jure y de facto a ocupar terrenos y conseguir acceso a los recursos sociales.

Por ejemplo, en el primer estallido de violencia en Durban, en 1985, los principales objetivos fueron los comerciantes, concejales y personas más acaudaladas de la comunidad india y africana. A partir de entonces el antagonismo se ha reformulado como una lucha entre comunidades que difieren en términos de su acceso a los recursos de la vida residencial: terrenos, vivienda, agua y servicios. Ahora se ha convertido en un conflicto entre distritos y campamentos de ocupantes ilegales, entre pobres e indigentes.

En este contexto, diferencias mínimas en el acceso a los recursos generan conflictos intensos. Las divisiones sociales basadas en esas diferencias materiales pueden pa-

recer secundarias, pero se han convertido en la barrera que define a los que están aislados en la periferia de la vida urbana y los que están integrados. La desaparición del áparteid no ha eliminado la diferenciación entre incluidos y excluidos; simplemente alteró su apariencia, su forma y su modo de aplicación.

También el repunte de conflictos en Transvaal, entre los que viven en los albergues para trabajadores y los residentes formales de distritos y campamentos, tiene un trasfondo de divisiones sociales. Los albergues para trabajadores han estado históricamente marginados y aislados socialmente de los distritos circundantes. Los trabajadores migratorios que viven allí, especialmente los hombres más viejos y tradicionalistas, se sienten como intrusos en un medio ambiente hostil, lo que deriva en relaciones tensas con los habitantes permanentes del distrito. A principios de los 80 los sindicatos construyeron su base organizacional en el East Rand reclutando a los trabajadores migratorios de los albergues. Esto introdujo el sindicalismo en la vida social y económica y sirvió para romper su marginación de los otros moradores del distrito. Los sindicatos organizaban a los habitantes de los albergues en los sitios de producción y reproducción, pero a mediados de los años 80 los gremios dejaron de utilizar los albergues como una base organizacional y pasaron a depender exclusivamente de los trabajadores que iban a las sedes sindicales, y a organizarlos únicamente en el punto de producción. La división entre producción y reproducción se consolidó y condujo a un vacío organizacional.

Este fenómeno anduvo de la mano con un creciente deterioro económico y el acelerado atrincheramiento de los rangos inferiores de la fuerza de trabajo, cosa que afectó a los moradores de los albergues (que de cualquier modo se cuentan entre los sectores más pobres de la sociedad urbana) más que a ningún otro sector, al aumentar el nivel de desempleo. Así surgió un estrato completo de hombres solos, desempleados, sin profesión ni hogar conocido, viviendo como intrusos en el cuarto de albergue de algún otro. Esto, combinado con la confianza depositada en dirigentes obreros más jóvenes, articulados y capacitados, llevó a los sindicatos a perder contacto con las necesidades e inquietudes de los moradores de los albergues, quienes se encontraron crecientemente amenazados por los procesos políticos, sociales y económicos de un medio ambiente urbano en veloz transformación.

También existe evidencia de que muchos de los portavoces xhosas de los albergues (aunque no todos), menos ligados a la tierra en Transkei que en KwaZulu, se mudaron a los barrios marginales, bien sea con sus familias originales o con familias urbanas recién constituidas. En cambio los portavoces zulúes, que tienen vínculos más estrechos con la agricultura de subsistencia y las estructuras tradicionales en

KwaZulu, prefirieron quedarse en los albergues como simples inmigrantes. Con todo lo miserable que puedan ser, esos albergues se convirtieron en el único soporte de estos hombres solos en las áreas urbanas. Dentro de la sociedad negra urbana los moradores de los albergues se hicieron cada vez más introvertidos étnicamente, aislados desde el punto de vista organizacional y marginados socio-económicamente; esencialmente pertenecen a otros tiempos: los del áparteid.

Es un giro irónico de la historia de Sudáfrica el que los sectores más explotados de la sociedad negra fueran los más amenazados con la desaparición del áparteid. Dado que la desintegración del áparteid también significó el abandono de las instituciones de la mano de obra migratoria y los albergues, sus moradores percibieron esta situación como una amenaza a toda su base de supervivencia urbana. A menos que se instrumentara un sistema adecuado para reemplazar los albergues, sus habitantes no tenían más alternativa que oponerse ferozmente a cualquier cosa percibida como una amenaza a su espacio. La posibilidad de que transformaran los albergues en viviendas familiares fuera de sus posibilidades económicas fue la amenaza más grave a su cordón umbilical con el entorno urbano. La reacción de los moradores dependía de la organización con que se encarara el problema. Pero los sindicatos ya habían renunciado a su papel, abandonando los albergues, y las organizaciones cívicas estaban en manos de los residentes del distrito.

En Transvaal el CNA (Consejo Nacional Africano) subestimó crasamente el potencial de movilización del movimiento Inkatha porque actuaba con la convicción de que las comunidades urbanas negras eran socialmente homogéneas. El Inkatha vio la posibilidad de activar una removilización en Transvaal, aprovechando como puntas de lanza la posición precaria de los moradores de albergues, el vacío organizacional en esos sitios y la base tradicional ya establecida por los zulúes. Estimulando una movilización en base al idioma y la etnicidad, el Inkatha utilizó el aislamiento de los moradores de albergues para introducir una cuña en las líneas de fractura entre ellos y los residentes permanentes del distrito. En un ambiente de bellicosidad, los albergues se convirtieron en algo parecido a fortificaciones, cuyos moradores salían para atormentar al COSATU (la Confederación de Sindicatos Sudafricanos) y el CNA como guerreros y carne de cañón del Inkatha.

La reforma política y los centros de poder beligerantes

Las causas políticas de la violencia deben tener raíces conceptualmente más profundas que la mera rivalidad política entre el Inkatha y el CNA. Lo que está en juego aquí son tres asuntos interrelacionados: el colapso del antiguo modo de regular

la cohesión política de la sociedad, los cambios en el papel del Estado en la contención de los antagonismos generados por el *áparteid*, el surgimiento de centros de poder beligerantes que luchan por establecer nuevas formas de hegemonía política en todos los niveles de la sociedad.

En Sudáfrica el uso de la violencia para imponer las políticas del *áparteid* ha sido parte inherente de las prácticas del Estado por décadas, especialmente a través de la acción de los administradores municipales, del control sobre la vivienda, de las leyes promulgadas y la actuación directa de la policía. La exclusión de la gente negra de los procesos democráticos nacionales, y sus experiencias en materia de represión estatal, han legitimado la violencia como medio para efectuar el cambio social. En la década de los 80 el colapso de los controles políticos, que eran parte integral de la política de urbanización del *áparteid*, condujo al resurgimiento de la oposición y la organización política de la población negra urbana contra la estructura gubernamental local del Estado segregacionista: el sistema de concejos comunitarios. Como estos carecían de una base social de apoyo y dependían casi exclusivamente del Estado segregacionista, en muchos casos quedaron totalmente destruidos o seriamente debilitados.

Pero eso no produjo una oposición política integrada y cohesionada en los distritos negros. El debilitamiento de los controles estatales a consecuencia de las sublevaciones populares de mediados de los 80 condujo más bien a la formación de centros rivales de poder dentro de las áreas residenciales negras. En Natal, a menudo esos centros tomaron la forma de organizaciones juveniles (aliadas más que nada con el CNA) y caudillos locales (aliados con el Inkatha), así como una serie de otras agrupaciones y facciones políticas menos importantes. Esto dio lugar a pugnas locales, regionales y nacionales por la hegemonía en las áreas urbanas. La lucha fue tanto contra el Estado (en sus versiones locales y centrales), como entre diferentes agrupaciones políticas de las comunidades urbanizadas y marginales.

En Natal el Inkatha se convirtió en el objeto de los ataques de las fuerzas aliadas al CNA. Sin embargo, en sus primeros años el Inkatha había contado con el apoyo del CNA, pero a finales de los años 70 hubo luchas internas en torno a la orientación y papel futuros del Inkatha, y como resultado éste se distanció del CNA. En 1979 el conflicto entre la política de «resistencia leal» y la «lucha de liberación nacional» desembocó en una mayor división entre el CNA y el Inkatha. Aprovechando la base de su región natal y el poder burocrático que le fue acordado como gobierno de KwaZulu, el Inkatha buscó entonces establecer en Natal una organización política alternativa que eclipsara al CNA, lo cual derivó en un conflicto directo

incluso entre los partidarios de ambas organizaciones, quienes veían a cualquier otro supuesto representante de los «oprimidos» como un enemigo potencial.

También existe una animadversión de vieja data entre la juventud urbana y el Inkatha. Este último actuó muy duramente contra el levantamiento de 1976, chocando con los escolares de KwaZulu en 1980 y con los estudiantes de la Universidad de Zululandia en 1983. En 1985 el Inkatha se vengó de los jóvenes ciudadanos soltando a sus fuerzas en los distritos negros de Durban. Si el Inkatha hubiera simplemente restaurado la ley y el orden, los antiguos residentes de esos distritos sin duda lo habrían seguido y apoyado, trayendo al orden a los jóvenes. Pero como los militantes del Inkatha usaron esta ocasión como una oportunidad para establecer su hegemonía mediante la fuerza y maltrataron a la mayoría de los jóvenes que encontraron en las calles, su actuación sirvió sólo para aumentar el antagonismo, distanció a muchos residentes mayores y de hecho dejó a los jóvenes a cargo de la política urbana.

El Inkatha, como fuerza política regional que gobierna a KwaZulu, estaba profundamente enclavado en la administración municipal, en la policía de KwaZulu y en la policía sudafricana. Esas organizaciones eran consideradas parte del régimen del *áparteid*, como extensiones del Estado central, y fueron objeto de ataques a mediados de los 80. Mientras en el resto del país estaban colapsando casi todos los aparatos administrativos de los distritos negros, en Natal las estructuras de poder del gobierno local estaban vinculadas a la administración del sistema regional de KwaZulu y unidas al movimiento Inkatha, altamente estructurado, disciplinado y relativamente poderoso. El papel del Inkatha en la administración municipal y regional le dio acceso a recursos considerables para el reclutamiento político. Por esa razón los levantamientos capitaneados por los jóvenes, que en Natal comenzaron sólo a finales de 1985, no se enfrentaron sencillamente a una expresión local frágil y cornprometida del Estado central. Se enfrentaron a estructuras del gobierno local respaldadas por un movimiento político con una base social de apoyo y reforzadas por la considerable maquinaria administrativa y represiva de un gobierno regional.

A partir de finales de los 80, el Inkatha recurrió cada vez más a reclutar habitantes de las chozas, a medida que perdía terreno en los distritos convencionales de Natal. Como los habitantes de chozas no tienen derechos de *jure* sobre la tierra, se estableció un control de *facto* mediante su propia capacidad de defender un pedazo de terreno. En esas circunstancias, los habitantes de las chozas recurrieron rápidamente a los líderes invasores y caudillos locales, con quienes intercambiaron obediencia y contribuciones, tributos y otros pagos por seguridad habitacional. Estos

caudillos han acudido al Inkatha y a las autoridades de Kwazulu para defender sus derechos de facto sobre la tierra, han buscado la ayuda de las estructuras regionales para que les proporcionaran a sus áreas las comodidades y servicios necesarios y han actuado para consolidar su control en los barrios marginales. Esto ha sido mutuamente beneficioso, pues la urbanización acelerada de los últimos cinco años ha debilitado la base de apoyo tradicional del Inkatha en las áreas rurales. En consecuencia, mediante la integración de esos caudillos, los barrios pobres y marginales de Natal son ahora una nueva base social de sustentación para el Inkatha. Aunque los habitantes de las chozas han ganado poco desde el punto de vista material con esta relación, tampoco han recibido ayuda material de ninguna otra fuente. Por lo tanto, hasta la más vaga promesa de posibles beneficios materiales mantiene la solidez de su apoyo a esas estructuras clientelistas y autoritarias.

En Natal muchos de los caudillos de las barriadas pobres exigen una disciplina paramilitar. Las familias suministran reclutas para grupos de ataque impi a cambio de protección contra ataques similares por parte de los jóvenes de los barrios vecinos. Todos los recursos de la comunidad - tierras, lugares para levantar las chozas, tiendas, expendios de licores, escuelas, jardines de infancia y reservas de agua - se controlan estrictamente. Toda una jerarquía de caudillos, lugartenientes y jefes de área se mantiene con contribuciones, tributos y otros pagos, algunas veces producto de la extorsión. Los caudillos dependen de sus lugartenientes para ejercer el control, garantizar la disciplina de la comunidad, sofocar la disidencia y conseguir los pagos. La estructura de autoridad de los caudillos está llena de rivalidades internas, intrigas y deslealtades. Los lugartenientes luchan constantemente por privilegios o intentan formar sus propias comunidades de ocupantes ilegales. En consecuencia muchos barrios pobres están envueltos constantemente en violentas luchas internas por el poder. Esos ápices de poder, y la incapacidad crónica de los caudillos para satisfacer las necesidades materiales básicas de sus comunidades, alimentan la disidencia entre los habitantes de las chozas. Los ataques contra vecindarios relativamente menos miserables en distritos convencionales se convierten en una válvula de escape para desviar esa disidencia interna.

En los distritos convencionales, al igual que en algunas áreas invadidas, los jóvenes vinculados con el CNA han formado organizaciones cívicas de defensa. En épocas de conflicto con las comunidades vecinas esas organizaciones actúan como unidades armadas. Las organizaciones juveniles varían desde organizaciones de defensa y seguridad de las comunidades, políticamente disciplinadas, hasta verdaderas bandas de criminales; de camaradas a ex-camaradas convertidos en criminales y llamados por esa razón comtsotsis. Al igual que los caudillos, las organizaciones de

jóvenes muchas veces obtienen contribuciones de los residentes y tratan de afianzar su poder asegurando el desarrollo urbano para sus comunidades: más tierras, mejor infraestructura residencial, viviendas y servicios. Sin embargo, independientemente de las aspiraciones ideológicas que dieron vida a las estructuras juveniles y cívicas, dado que ellas enfrentan los mismos obstáculos al atender las necesidades de sus comunidades, siguen siendo propensas a convertirse al caudillismo, corrupción, criminalidad y extorsión. Esto es así particularmente en el caso de los barrios marginales. La cruda compulsión de las fuerzas materiales que gobiernan la vida de los barrios marginales, y que ineludiblemente salen a la superficie y actúan como una influencia corruptora, se puede ilustrar con los ejemplos de Natal y Transvaal, donde los caudillos locales de algunos barrios marginales asignan tierras únicamente a miembros del CNA.

Dentro de las estructuras juveniles y caudillistas, la violencia se ha institucionalizado por igual como un medio para mantener la cohesión social interna y para satisfacer las necesidades materiales básicas. En esas estructuras el liderazgo tiene un gran interés en la perpetuación del conflicto violento y se opone agresivamente a cualquier intento de dismantelar sus estructuras de poder. Por consiguiente, es probable que esa violencia institucionalizada siga adelante incluso después de que se hayan acordado convenios de paz nacionales y regionales. Sólo los que están mejor informados y disciplinados políticamente y más integrados en las organizaciones políticas principales pueden ser controlados rápidamente por el CNA o el Inkatha.

La violencia también se ha vuelto casi incontrolable debido a la relación entre las organizaciones locales y nacionales involucradas en el conflicto. Por sí mismo ningún bando en un conflicto local puede obtener una victoria concluyente, ya que sus poderes y capacidades están determinados en parte por los vínculos con organizaciones más grandes o agencias estatales. Asimismo, un acuerdo a nivel nacional se puede arruinar fácilmente con cualquier estallido de violencia a nivel local o regional, haciendo así sumamente difícil asegurar y mantener la paz. Cuando las relaciones organizacionales son difusas o inexistentes, tiende a dominar la lógica de la dinámica socioeconómica y política local. Por una parte, para conseguir poder a nivel local el CNA, el Inkatha, y cada vez más las instituciones del gobierno central, se ven en la necesidad de operar a través del caudillo o los centros juveniles locales. De la misma forma los grupos de poder locales buscan el apoyo de las organizaciones regionales y nacionales: el Inkatha y el gobierno regional o nacional por un lado, y la estructura nacional del CNA, por el otro. Esto tiende a introducir el conflicto nacional en las situaciones locales y aviva las llamas iniciadas por los

asuntos locales. Sin embargo, las organizaciones nacionales tienen escaso control sobre los centros locales de poder y, por consiguiente, no pueden simplemente tirar de las riendas de sus fuerzas locales cuando se están llevando a cabo iniciativas de paz de nivel nacional. Esta interrelación compleja entre los centros de poder locales, regionales o nacionales es lo que ha hecho que el Acuerdo Nacional de Paz sea tan imperativo, y a la vez tan difícil de ejecutar.

La desintegración del *áparteid*, vista desde la perspectiva de las fuerzas organizacionales y sociales, no es un simple proceso de reemplazo de un sistema social por otro. Todavía persisten viejos elementos, ideologías y estrategias, y las fuerzas sociales comprometidas con el orden anterior todavía operan, conciente o inconcientemente, conjuntamente y en colisión con los nuevos elementos. Más aún, las estrategias y políticas que adoptaron las organizaciones bajo las condiciones sociales, políticas y económicas previas no desaparecen sencillamente, y tampoco es cuestión de añadir simplemente nuevas políticas y estrategias. Los legados históricos pesan demasiado sobre las organizaciones, y conducen a una mayor confusión, incoherencia organizacional y conflicto brutal cuando los grupos dentro del Estado, el Inkatha y el CNA luchan por mantener una antigua conexión dentro de cada organización o por afirmar su hegemonía sobre las demás.

El Estado, que perdió el control social y político sobre la vida urbana negra con la desintegración del *áparteid*, ha tenido que intervenir en formas muy específicas para reimponer el orden. Bajo el *áparteid* clásico existía una construcción sociopolítica impresionante, apuntalada por una serie de mecanismos legislativos coherentes y entrelazados, que permitía al Estado mantener el orden social con intervenciones represivas directas. La ausencia de un gran plan aceptado socialmente, los cambios radicales en la política estatal bajo el régimen de De Klerk y la dependencia de las intervenciones locales han creado dislocaciones entre el nivel local y nacional del Estado y entre dependencias estatales. La situación se complicó aún más con la disolución de algunos departamentos estatales y el debilitamiento del control ejecutivo sobre algunos otros. Resalta el caso de Bantu Affairs Administration Board, que fue desmantelado y no ha sido reemplazado por un gobierno local efectivo en las áreas residenciales negras. La transición del enfrentamiento al acercamiento entre el gobierno y el CNA, ha producido tensiones y divisiones internas dentro del ejército, y algunos elementos de la policía están trabajando según sus propias agendas.

Contrariamente a los procesos de negociación y acercamiento entre el gobierno y el CNA, la policía muchas veces continúa actuando en términos de las prácticas esta-

blecidas en el pasado-interviniendo a través del apoyo de los caudillos, las bandas y la policía de Kwazulu. En muchas áreas rurales los policías kwazulenses tienen que someterse al control de un determinado jefe porque viven en su jurisdicción. Están obligados a khonza (rendirle pleitesía). La realidad de la situación es que en muchas áreas los jefes ejercen un control sobre los policías que aprovechan a menudo en forma arbitraria e ilegítima. Por órdenes de los jefes los policías allanan las casas de sus opositores, hostigan violentamente y arrestan gente inocente que a menudo es liberada después por los fiscales públicos locales. En consecuencia, el papel de la policía de Kwazulu muchas veces alimenta directamente las luchas locales entre varios centros de poder beligerantes, y en lugar de restablecer el orden aviva las llamas del violento conflicto.

En Natal hay numerosas acusaciones, y cada vez más evidencias comprobadas, de que la policía local y los militares no son imparciales. En Transvaal hay fuertes indicios de que detrás de algunas masacres se encuentran elementos del ala derecha de la policía o vinculados con ella. Recientemente se ha revelado evidencia de que oficiales de alta graduación dentro del ejército le han dado apoyo financiero al Inkatha para actividades políticas y entrenamiento paramilitar. Esto indica que la intervención del Estado en la violencia algunas veces ha sido dirigida y planificada centralmente por niveles superiores de algunas secciones de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no está claro que esos elementos sean parte de una estrategia del régimen de De Klerk, ni que se hayan reagrupado, hasta ahora, como una alternativa cohesiva a ese régimen, dentro de los niveles ejecutivos del Estado.

El punto enfatizado es que la disolución de la cohesión del Estado y la descomposición del poder central y de la legitimidad es lo que proporciona el contexto para esas intervenciones clandestinas por parte de secciones e individuos de las fuerzas de seguridad a nivel local y nacional. No hay una sola «tercera fuerza» operando, sino varias. A despecho de la eficiencia práctica, devastadoramente mayor de las «terceras fuerzas» que emanan del Estado, ellas son similares a otras fuerzas violentas que operan fuera del ámbito de las políticas declaradas del CNA o del Inkatha. Tales fuerzas son capaces de operar eficazmente debido a la descomposición social y política de la sociedad, que les permite actuar como catálisis coyuntural. Lo que es más, tienen una relación ambigua con los actores nacionales (el CNA, el Partido Nacional y el Inkatha) porque cada uno de éstos se ha apoyado en parte en sus servicios para asegurar el poder en un período de incertidumbre.

Dentro de Sudáfrica en general, pero en la comunidad negra en particular, la violencia se ha vuelto socialmente aceptable como medio para lograr la hegemonía. La

violencia ha sido usada tanto por el Estado como por las fuerzas de liberación como medio para retardar o asegurar cambios políticos, aunque la capacidad del Estado para emplear la fuerza, al igual que el actual despliegue de instrumentos violentos, ha sobrepasado con creces al movimiento de liberación.

Hoy en día, y particularmente entre los jóvenes, el CNA carga el peso de haber recalcado durante décadas que la liberación sólo vendría «a punta de pistola» y que al poder había que tomarlo, que no se podía negociar. Este legado histórico de la lucha armada, acoplado al énfasis de algunos años atrás en la «ingobernabilidad», refuerza las tendencias dentro de las filas del CNA (y especialmente del PCSA) que naturalmente asocian la violencia con la acción política militante. Considerando que todavía tiene que construir una organización política cohesiva dentro de Sudáfrica, el CNA es especialmente vulnerable a las presiones contradictorias de su militancia y de sus potenciales partidarios, lo que hace particularmente difícil a los dirigentes ejercer autoridad sobre los jóvenes de los distritos.

El Inkatha reconstruyó su base de poder en Natal a mediados de los 80, captando a los residentes de los barrios pobres a través de los esfuerzos de los caudillos locales. También reconstruyó su base en Transvaal, y en el proceso se reafirmó nacionalmente mediante las acciones coercitivas y violentas de los moradores de albergues en las áreas residenciales negras. En algunos lugares se llegó a acuerdos de paz entre el Inkatha y los funcionarios regionales del CNA, sólo para que luego los rechazaran los jefes y cabecillas alineados con el Inkatha. Aparte de la naturaleza incontrolable de muchos caudillos vecinales, líderes de albergue y funcionarios y consejeros del Inkatha, existen diversas estructuras del Estado kwazulense que operan en oposición tanto a otros sectores del Estado regional como al Estado central sudafricano. Las jerárquicas y violentas estructuras caudillistas, unidas a un énfasis en el tradicionalismo tribal estricto, han reforzado poderosas fuerzas disciplinarias dentro del Inkatha que equiparan el consenso político con la imposición enérgica de las ideas.

De allí que no resulte sorprendente que en las luchas entre centros rivales de poder a nivel local, ya se trate de camaradas del CNA o de caudillos del Inkatha, se aproveche instintivamente esa cultura de la violencia para tratar de imponer la hegemonía y control social sobre la vida de las comunidades. Conquistar la hegemonía política equivale a sacar a los oponentes del distrito, albergue o barrio marginal.

La desintegración de la vida social negra, la ausencia de mecanismos de regulación social y la espiral de la cultura de la violencia han multiplicado también otras fuer-

zas violentas apolíticas: pandillas, sindicatos del crimen y gánsters. Allí proliferan los que meses atrás se alineaban en uno u otro lado de la divisoria política. La brecha entre un dirigente del Inkatha que utiliza un impi contra un joven del CNA, y un caudillo que utiliza un impi principalmente para arreglar cuentas, extorsionar a cambio de protección y acumular riquezas mal habidas, e sumamente angosta. El botín de uno es el robo del otro. De manera similar muchos de los jóvenes activistas que con frecuencia viven entre los matorrales, sin recursos de subsistencia y sin un jefe de escuadrilla, han derivado hacia el crimen como un medio de supervivencia. Lo que hoy se hace por desesperación, mañana se vuelve rutina fácilmente. Otros han tenido que vérselas con la justicia violenta y arbitraria de los tribunales irregulares administrados por sus propios camaradas y han corrido precipitadamente y directo a los brazos de las autoridades gubernamentales, de los vigilantes patrocinados por el Estado o de las bandas criminales. Muchos de los mal entrenados y violentos kitskonstabels que operaban en los distritos negros hace unos pocos años fueron anteriormente destacados jóvenes activistas. De forma similar, la banda de criminales que actúa en los distritos de Durban, el amasinyoras, justamente temida, tiene su génesis en jóvenes descontentos que adquirieron su moral y técnicas en la violencia política. Otros son simplemente jóvenes que no tienen forma de distinguir entre la coacción violenta, la criminalidad y la política, pues crecieron con el concepto de que el fin justifica todos los medios y ellos determinan los fines. La violencia se alimenta de esas tendencias y confunde las distinciones cruciales entre el crimen y otras formas de lucha social y política. A medida que pasa el tiempo la violencia política contra el Estado y las organizaciones políticas rivales está degenerando en crimen abierto y sin reservas.

Soluciones

Las reformas neoliberales ofrecen el prospecto de un crecimiento masivo y continuo de la población marginal urbana, y con ello la continuación del conflicto en las periferias urbanas. Más aún, bajo la reforma neoliberal sólo un componente relativamente pequeño de la creciente población africana pudo hacerse un lugar dentro de la clases profesionales, asalariadas y calificadas que están en expansión. Sin embargo, justamente esa sección de la población negra ofrece la mayor oportunidad para el liderazgo, la estabilidad y la reconciliación política. A menos que se le dé oportunidades en la sociedad, seguirá siendo altamente inestable. Si se desea seguir una nueva vía de desarrollo basada en el crecimiento económico. La redistribución y la estabilidad social es fundamental una alianza constructiva entre esos estratos y los desposeídos urbanos.

No obstante, si la política estatal no presta atención a los antagonismos originados por la distribución de recursos marginales no se puede construir una alianza. Puesto que la vía neoliberal de desarrollo va a acentuar la división y el antagonismo social, es probable que tenga que depender del poder coercitivo del Estado para mantener bajo control a los desposeídos. Esto a su vez perpetuará la situación, con lo cual los estratos medios y los obreros calificados serán muy vulnerables a las presiones coercitivas de la masa de la población africana desposeída.

Si bien el neoliberalismo no es una solución, igualmente argumentaríamos que hay que abandonar la idea de que Sudáfrica pueda ser reconstituida como una sociedad sin clases. La estabilidad y la prosperidad se basarán en una expansión masiva de los nuevos estratos medios, especialmente de las clases que reciben sueldos y salarios en «forma productiva», así como en la redistribución de recursos a los pobres urbanos marginados en una forma que libere su «capacidad productiva» antes que permitir los excesos consumistas aislados. En este proceso hay que atacar tres aspectos del problema: la expansión del empleo en el sector formal, gastos públicos reproductivos para remediar las disparidades, y medidas para liberar el potencial productivo de los excluidos del sector formal.

Por todo lo anterior debemos partir de la posición de que es más probable que la división en clases llegue a reemplazar hasta cierto grado la división racial, antes que las divisiones raciales sean reemplazadas por una sociedad sin clases. En consecuencia, necesitamos rescatar el concepto de diferenciación de clases de su asociación con el áparteid reformado y la reforma neoconservadora. Para hacerlo tenemos que estar dispuestos a aceptar el proceso de diferenciación entre las clases y, reconociendo los intereses diferentes, construir relaciones fundamentales entre las clases en torno a elementos diferentes de reconstrucción urbana. En otras palabras, adoptar un enfoque que reconozca la existencia continua de contradicciones de clase pero que intente reprimir los excesos del sistema de mercado-propiedad privada, en lugar de tratar de eliminarlo. Esto permitiría la creación de instituciones nuevas o modificadas dentro de las cuales se impidan nuevos repartos en una gama de asuntos que va desde el salario y las condiciones de trabajo hasta la vivienda, el transporte, etc. Dentro de esas estructuras nuevas o modificadas se desarrollaría un nuevo tipo de relación entre las principales clases y grupos. Ellas se convertirían en foros para la clasificación, formalización y monitoreo de acuerdos (pactos) en materias tales como salarios, productividad y el uso de excedentes; reinversión (estrategia industrial) y programas redistributivos (vivienda, salud, educación, transporte, infraestructura y bienestar social).

Hasta ahora los intentos de atacar las consecuencias de la rápida urbanización por parte de los africanos se han limitado a medidas para promover la diferenciación residencial dentro de las áreas negras, a base de contraer los recursos financieros. Esta ha sido una de las mayores contribuciones a la violencia en las áreas negras; la hemos conceptualizado como una forma de conflicto desplazado. Para aliviar la presión sobre los recursos escasos residenciales en las periferias urbanas negras es vital renegociar las ciudades. Lo que esto significa es que las ciudades deben abrirse residencialmente a los estratos negros medios y que sus recursos sociales deben abrirse más ampliamente a la población negra en general. La solución del conflicto residencial urbano requiere en parte una redistribución de los recursos a través de acuerdos que abarquen toda la ciudad: la distribución y el acceso a los recursos sociales urbanos desde la sociedad urbana blanca a la negra, pero en formas que no sean amenazantes, que más bien extingan el enfrentamiento o la lucha armada.

La apertura de espacios económicos, residenciales y políticos tiene que hacerse a través de negociaciones en estructuras tripartitas o multipartitas - a nivel nacional, regional y local para impedir los repartos - similares o comparables a los procesos de negociación que ocurren en la industria entre el capital, los sindicatos y el Estado. En otras palabras, debería hacerse en una manera que presuponga el abandono del racismo como un principio fundamental; que implique la participación de todas las partes involucradas (gobierno y comerciantes locales blancos, intereses residenciales blancos, intereses residenciales urbanos negros); que entrañe una redistribución de los recursos sociales residenciales; que implemente sistemas de impuestos y gastos que reduzcan las diferencias residenciales de clase sin minar radicalmente las configuraciones residenciales existentes; que abra nuevos espacios residenciales en los centros de la ciudad para otros estratos medios en expansión; y finalmente, que libere y reubique los recursos residenciales urbanos para el desarrollo urbano negro en las periferias metropolitanas.

El que la violencia subsista o no, va a depender no sólo de los pactos de paz que están negociando actualmente las partes en conflicto, sino igualmente de si los programas de desarrollo que acompañan el acuerdo político se aplican a los fundamentos del antagonismo social y reducen las divisiones sociales, o siguen acen tuándolas. Si bien estos acuerdos de paz y desarrollo pueden comenzar en las áreas residenciales negras, sus posibilidades de éxito serán limitadas si no son parte de un proceso más amplio de reconstrucción citadina, metropolitana y regional, en el cual se acometa la planificación y administración de la base total de recursos con un enfoque integrado, y en el cual la reconstrucción y redistribución económica estén vinculadas en un enfoque único que abarque las comunidades previamente

fragmentadas racialmente. No es suficiente juntar las partes políticas del conflicto - el Inkatha, el gobierno y el CNA -, otros intereses organizados importantes con participación en un área local o región (comercio, sindicatos, las iglesias) tienen que ser introducidos institucionalmente en el proceso.

Una dimensión crucial del proceso de negociación es la cooperación para poner coto a las acciones de la policía, los militares, el ala armada del CNA, los impis del Inkatha y otras estructuras de violencia en los distritos. El cese de las hostilidades no es suficiente; es necesario desmilitarizar la sociedad, desarmar el pueblo y aplicar la ley a todos los que se oponen a estas medidas por interés en mantener su propio acceso privado a las armas y al poder coercitivo. Hay que dismantelar las estructuras caudillistas y juveniles en las áreas residenciales negras o convertirlas en organizaciones políticas o cívicas locales que luchen por el poder con medios democráticos. El pacto de cese de la violencia debe incluir un acuerdo sobre las reglas de la contienda política democrática. Tal como han argumentado muchos analistas, el desarrollo de tropas políticas sólo puede llevar a una mayor desestabilización. Sin embargo, existe una clara necesidad de actividades de auto-protección de las vecindades, que deberían, en su concepción y por principio, desvincularse de la movilización política.

De la misma manera hay que reformar los aparatos policiales, de seguridad, judiciales y penales para desembarazarlos de su herencia segregacionista. Las investigaciones judiciales deben liberarse de la policía, que no tiene credibilidad y muchas veces es gran parte del problema, y ser puestos en manos de inspectores especiales bajo el control directo del fiscal general. Pensamos que si se observa que las instituciones de aplicación de las leyes se ocupan de la implementación de la justicia, y no sólo de controlar los desórdenes, existe una posibilidad de fomentar una cooperación creciente y tal vez una eventual integración de las estructuras de protección civil y las fuerzas de seguridad del Estado. Dado el antagonismo existente en muchas áreas, esto significará el establecimiento de estructuras de control y enlace que incluyan a las partes en conflicto y a las que se consideran imparciales, tales como los sindicatos y el comercio.

Para que tengan éxito, las negociaciones sobre la violencia en las área residenciales negras tienen que ser parte de la renegociación de la ciudad completa y sus recursos. De la misma forma, las negociaciones sobre la violencia a nivel nacional tienen que ser parte de la renegociación de los recursos de la nación y de cómo se reubicar.

Es una opinión generalizada que la violencia política es un obstáculo para la estabilidad política y la reactivación económica. Aunque también es cierto que la violencia se ha convertido en un gran obstáculo para la estabilidad política en Sudáfrica, sería un error pensar que superar la violencia política abriría automática o fácilmente el camino a la reactivación económica y la recomposición social, y viceversa. La violencia en las áreas urbanas está profundamente entrelazada con los asuntos políticos más amplios que están en juego en la negociación de una nueva Sudáfrica, al igual que con los asuntos económicos y sociales de la reconstrucción. En base a nuestro análisis está claro que la estabilidad política debe estar acoplada a una vía acordada de reconstrucción social y económica que la prosiga.

No decimos que la violencia sólo puede solucionarse si se atienden simultáneamente todas sus múltiples dimensiones y causas. Está claro que el punto decisivo es el nuevo conjunto de reglas políticas y el nuevo sistema político y constitucional. Pero si sólo se enfocan esos asuntos, entonces simplemente habremos auto-negociado en una solución del 50%, y se profundizarán nuevas fracturas económicas y sociales.

Conclusión

La Sudáfrica posterior al *áparteid* está en la encrucijada: puede hundirse en la destrucción, la inestabilidad y el caos violento o puede ser restablecida. Si bien nadie busca lo primero intencionalmente, si no seguimos una solución que sitúe a la violencia en las extensas fuerzas sociales, económicas y políticas en juego, éstas se consolidarán y minarán constantemente las soluciones parciales mejor intencionadas. La escala de destrucción aumentará, devorando los intereses sectoriales y parroquiales localizados de diferentes fuerzas sociales y actores individuales, y manteniendo la espiral de muerte y devastación.

Las líneas básicas de división sobre la futura estructura social de Sudáfrica han sido establecidas por un conflicto en torno a si la nueva Sudáfrica debe tender al igualitarismo o al elitismo. Frenando la violencia podemos adoptar una solución nacional integrada - "crecimiento a través de la redistribución"- que oriente las intervenciones del Estado hacia una redistribución radical de los recursos y poderes sociales, que intente reducir las contradicciones y moderar las relaciones antagónicas, pero que lamentable pero inevitablemente mantenga todavía algunas de las divisiones sociales existentes.

Por desgracia tenemos que admitir que la estabilización también puede tomar otras formas menos agradables. La fórmula preferida de la solución neoliberal es la que hemos llamado «solución del 50%», que volverá a dividir Sudáfrica en dos naciones, estructuradas institucionalmente por clases y no por razas, y donde se mantiene el dominio de la población blanca sobre los recursos sociales pero se hace un lugar para las nuevas clases medias negras y un pequeño estrato acomodado de la clase trabajadora. El resto de la sociedad quedará abandonado en la periferia de la vida social, donde las variaciones mínimas en el acceso a los recursos sociales tendrán cada vez mayor importancia, dando lugar a un incremento de la violencia. Con seguridad eso traerá como resultado mayores divisiones de clase y raza que agudizarán los antagonismos, y que sólo se podrán estabilizar con un estatismo creciente, cuando un nuevo gobierno, sea cual sea su tinte racial o político, se vea forzado a mantener el país unido por medios autoritarios. Esto puede adoptar una variedad de formas, incluyendo el clientelismo que se encuentra tan a menudo en el resto de Africa. De esa manera el capital podría mantener relaciones reafirmantes con los marginados a través de redes políticas de padrinazgo en los barrios pobres de la periferia urbana, estableciendo así una alianza entre una clase capitalista no segregacionista pero predominantemente blanca, la clase media negra y los desposeídos, contra la clase obrera. De esta manera habremos salido del áparteid sólo para encontrarnos de regreso en una nueva forma de autoritarismo.

*Nota: el presente análisis se basa principalmente en un trabajo de campo realizado en Natal por la «Urbanisation and Violence Project», establecido en la ISER (Universidad de Durban Westville) y la CSDS (Universidad de Natal), y en fuentes secundarias tales como el Financial Mail, Weekly Mail, Sunday Tribune, Sunday Times, Natal Witness y Vrye Weekblad. También hemos recurrido a varios testimonios de víctimas de la violencia y de sus representantes legales. Este ensayo fue presentado originalmente al Economic Trends Research Group en septiembre de 1991 y apareció en una versión más extensa en Economic Trends Working PaperNº 3.